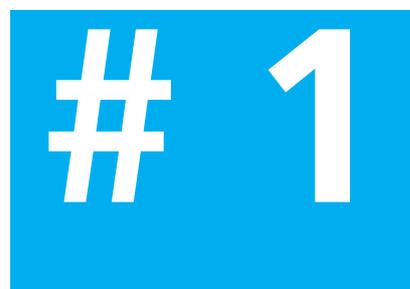


Trump y el “patio trasero”:

Hegemonía mundial, intervencionismo y Venezuela

Grupo de Trabajo
Estudios sobre Estados Unidos de CLACSO



Febrero 2019

| | |
|--|--|
| Trump y la reconfiguración imperial 3 <i>Gabriel E. Merino (CONICET-UNLP, Argentina)</i> | |
| Trump y Venezuela 6 <i>Carlos Eduardo Martins (IRIDI/LEHC-UFRJ, Brasil)</i> | |
| La guerra declarada de Estados Unidos contra Venezuela” 9 <i>Marco A. Gandásegui, hijo (Coord. GT de Estudios sobre Estados Unidos de CLACSO, Investigador asociado del CELA, Panamá)</i> | |
| Jamás... una intervención armada”: Estados Unidos, Venezuela y la posición uruguaya 12 <i>Roberto García (Profesor Adjunto de la UdelaR, Uruguay)</i> | |
| El Bloqueo Económico de Estados Unidos a Cuba desde la ética en las relaciones Internacionales 15 <i>Raúl Rodríguez Rodríguez (CEHSEU - Universidad de La Habana, Cuba)</i> | |



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Introducción

Leandro Morgenfeld (Coord. GT Estudios sobre Estados Unidos, UBA-CONICET, Argentina)

Desde hace 15 años, el Grupo de Trabajo Estudios sobre Estados Unidos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), integrado actualmente por 22 investigadores de 9 países, viene analizando críticamente el modus operandi de Estados Unidos a través de tres principales líneas o ejes de trabajo: i) la crisis de la hegemonía estadounidense y su impacto global; ii) las clases gobernantes y dirigentes y las estructuras político-económicas y culturales al interior de dicho país; iii) los cambios y continuidades en la relación entre Estados Unidos y otros países y gobiernos de Nuestra América.

En 2018 publicamos el quinto libro del grupo, *Estados Unidos contra el Mundo. Trump y la nueva geopolítica* (Siglo XXI) –disponible en la biblioteca virtual de CLACSO–, analizando las rupturas y continuidades en el gigante del norte, a partir de la llegada a la Casa Blanca del magnate neoyorquino.

La agudización de los ataques de Washington contra lo que el Consejero de Seguridad Nacional John Bolton denominó el nuevo “eje del mal” en la región (Cuba, Venezuela y Nicaragua) y la actual ofensiva injerencista e imperialista contra Caracas nos impulsaron a lanzar este *Boletín de Estudios sobre Estados Unidos*, con el objetivo de poder abonar al debate de coyuntura, tan necesario en un momento donde el principio de autodeterminación de los pueblos está siendo avasallado brutalmente.

En esta primera entrega, el eje está en el análisis de los primeros dos años de Trump al frente de la Administración estadounidense, y en particular en su vínculo con los países no alineados de América Latina y el Caribe.

El artículo de **Gabriel Merino**, “Trump y la reconfiguración imperial”, desentraña, en una etapa crítica de transición histórica del sistema mundial, la pugna entre dos grandes estrategias imperiales: la del unipolarismo multilateral (Obama), sostenido por las transnacionales, las redes financieras y el establishment liberal, y la del unipolarismo unilateral americano (Trump), que reúne tendencias más nacionalistas e industrialistas, planteando matices frente al establishment neoconservador (Bush Jr). Permite comprender mejor cómo se expresan las distintas fracciones en disputa al interior de Estados Unidos, la vuelta a una suerte de keynesianismo militar y la guerra comercial en curso.

Los artículos de **Carlos Eduardo Martins**, “Trump y Venezuela”, y **Marco A. Gandásegui**, hijo, “La guerra declarada de Estados Unidos contra Venezuela”, se ocupan del conflicto en el país caribeño que tiene hoy en vilo a toda la región y al mundo. El primero explica adecuadamente lo que está en juego: “El desenlace de la situación venezolana tendrá un importante efecto para la disputa del poder mundial y para el balance de las fuerzas políticas en América Latina. El eventual derrocamiento del gobierno de Maduro significará el avance del imperialismo territorialista y sin hegemonía de Estados Unidos en la región. Será el primer paso para derribar lo que el gobierno Trump llama de ‘Troika de la Tiranía’, constituido por los gobiernos de Cuba, Nicaragua

y Venezuela, pero también para contener y desestabilizar a los gobiernos nacionales populares, como los de Bolivia y México, y las democracias, criminalizando a los movimientos sociales y las izquierdas, y ampliando las bases militares estadounidenses en América del Sur, en particular en el espacio amazónico”.

El segundo ubica el conflicto en el marco geopolítico de la posguerra fría, para luego analizar en qué consiste la guerra que Estados Unidos declaró contra la revolución bolivariana, deteniéndose en la lucha de clases interna en Venezuela. Por último, se ocupa de cómo afecta el conflicto a Panamá, cuya soberanía también se vería vulnerada por la ofensiva imperialista estadounidense. La situación expone a ese país centroamericano a ser objetivo de ataques militares extranjeros, como ocurrió en 1989.

El artículo de **Roberto García**, “‘Jamás... una intervención armada’: Estados Unidos, Venezuela y la posición uruguaya”, analiza la posición de Montevideo frente a la ofensiva imperialista y el seguidismo del Grupo de Lima. Uruguay, junto a México, viene insistiendo en la necesidad imperiosa de una salida negociada y de evitar una deriva militar. Recoge el discurso de Elbio Roselli, representante uruguayo en el Consejo de Seguridad de la ONU y lo inscribe en tradiciones históricas de la política de ese país.

Por último, el aporte de **Raúl Rodríguez Rodríguez**, “El Bloqueo Económico de Estados Unidos a Cuba desde la ética en las relaciones Internacionales” historiza las más de cinco décadas de agresión económica contra la isla, incluyendo el breve período de distensión bilateral desde diciembre de 2014, y el giro y

endurecimiento implementado a partir de la asunción de Trump: "Los actos más recientes, caso de la amenaza de aplicación del capítulo III de la ley Helms Burton y la amenaza de la re-inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado, busca inicialmente, de acuerdo con el espíritu de la ley de 1996, entorpecer los esfuerzos de Cuba para atraer y promover la inversión extranjera directa, recrear la imagen de Cuba como un amenaza a Estados Unidos y sobre esa base reforzar el abarcador sistema de sanciones económicas como un instrumento lograr el cambio de régimen en Cuba, un objetivo largamente acariciado por la clase corporativa dominante de Estados Unidos". Así, los ataques contra la isla se inscriben en la ofensiva imperial expresada en la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.

Los cinco artículos de este primer Boletín, de investigadores de Argentina, Brasil, Panamá, Uruguay y Cuba, permiten comprender distintas dimensiones de la actual ofensiva imperial estadounidense y de los enormes desafíos que suponen para Nuestra América, con el riesgo cierto de que deje de ser una zona de paz. Reivindicar los principios de "no intervención" y "autodeterminación de los pueblos", ante la desembozada agresión contra los países bolivarianos, es una tarea urgente para todas las fuerzas democráticas, populares, antiimperialistas y de izquierda de todo el mundo y, en particular, de Nuestra América.

Trump y la reconfiguración imperial

Gabriel E. Merino (CONICET-UNLP, Argentina)

El sistema mundial se encuentra en plena transición histórica. La crisis de hegemonía se refleja en la multiplicación de conflictos que tiene como protagonistas a las principales potencias mundiales, en el cambio de jerarquías del sistema interestatal y en las profundas transformaciones de la economía mundial: transnacionalización productiva, revolución científico-técnica, financiarización, sobreacumulación de capital, etc. Este proceso modifica el lugar de los Estados Unidos y de Occidente, así como del capital transnacional del Norte global en el sistema mundial.

Frente a esta situación, en los Estados Unidos y en el polo de poder angloamericano (Reino Unido, Canadá, Australia, Israel) surgen distintas respuestas imperiales y se profundiza la polarización entre proyectos políticos estratégicos, al calor de una fractura en lo que se considera su establishment y una creciente crisis de legitimidad del sistema en las clases populares. Cualquiera de las respuestas imperiales en pugna ponen en crisis el orden mundial creado por Estados Unidos y el llamado Occidente.

Con la asunción de Donald Trump se realiza un cambio de las correlaciones de fuerzas en Estados Unidos a favor de lo que definimos como fuerzas americanistas y nacionalistas (con solapamientos y contradicciones) en detrimento de las fuerzas globalistas. Obviamente que se mantiene cierta unidad estratégica condensada en el estado, pero claramente se observan cambios

en las políticas estatales y en las geoestrategias desarrolladas para la persecución de intereses geopolíticos (por ejemplo, en relación a Cuba, a Irán, la OMC, el G-20, etc.).

La estrategia nacionalista-americanista, resumida en el eslogan "Estados Unidos primero", es el producto de un conjunto de actores que ven como una amenaza la pérdida de la capacidad de decisión nacional-estatal y la pérdida de la primacía mundial a partir de la subordinación a instituciones "globales", acuerdos y tratados multilaterales, respecto por las alianzas tradicionales, emergencia de potencias desafiantes, etc.

Converge en el nacionalismo-americanismo un conjunto de capitales retrasados y/o con menor grado de transnacionalización, más dependientes del mercado interno estadounidense y del hardpower gubernamental. Hay un dato clave en tal sentido: mientras los sectores de punta, núcleo orgánico del capitalismo transnacional, mostraron entre 2009 y 2016 un aumento de la productividad de 3,5% anual, las empresas más atrasadas, que significan un 70% de las compañías estadounidenses, tuvieron un aumento de sólo 0,3% por año. Ello quiere decir que la mayor parte del entramado empresarial quedó estancado, produciendo una fractura económica, que se tradujo sin lugar a dudas en presiones para la adopción de políticas "proteccionistas" y nacionalistas como las que expresa el trumpismo. Robert Lighthizer, actual representante comercial de Estados Unidos y viejo batallador de los intereses siderúrgicos de su país, expresa con claridad estos intereses.

También importantes sectores militares ven como una amenaza para la seguridad nacional la desindustrialización de los Estados Unidos y vienen presionando para una política contraria al globalismo. En este sentido, de cara a las elecciones de 2016 que consagraron a Trump, 88 generales y almirantes retirados escribieron una carta pública para apoyarlo.

En Estados Unidos están en lucha dos grandes estrategias imperiales. Aunque es mucho más complejo, el esquema binario resulta esclarecedor. Por un lado, el unipolarismo multilateral — practicado en la administración Obama y sostenido por la mayor parte de las transnacionales, las redes financieras globales y el establishment liberal— que se centra en el fortalecimiento de instituciones “globales” hechas a su imagen y semejanza, mega acuerdos comerciales (TPP y TTIP), expansión y centralización político-militar de Occidente y guerras híbridas con apoyos multilaterales del Norte Global para disciplinar actores desafiantes. Como afirmaba Obama, se deben imponer ‘las reglas de juego del siglo XXI’. Para estas fuerzas globalistas Estados Unidos quedó “chico” como recipiente central de la acumulación y político-militar central del sistema interestatal. El problema, entonces, es cómo construir suficiente poder e imponer una nueva institucionalidad transnacional para garantizar una nueva fase hegemónica y contener/subordinar a los poderes emergentes.

En frente a esta posición, aunque hay muchos grises en el medio, observamos el unipolarismo unilateral americano que, con la presidencia de Trump, contiene elementos más nacionalistas e industrialistas emergentes

(como expresa Stephen Bannon por “derecha”), matizando el predominio del establishment neoconservador que tuvo el unilateralismo practicado durante el gobierno de George W. Bush.

El nacionalismo-americano de Trump, busca “recuperar” la hegemonía estadounidense en el sistema mundial como Estado-nación y fortalecer unilateralmente el polo angloamericano con vértice en Washington para, desde ahí, librar las luchas contra los polos de poder desafiantes y disciplinar a los aliados. Para ello, resulta fundamental recuperar la hegemonía en el continente americano, desde el cual proyectarse a nivel mundial. Y en tal sentido se profundizan las políticas de seguridad hemisférica enmarcadas en la doctrina Monroe, exacerbando el intervencionismo en la región frente a cualquier alternativa que ose desafiar los intereses de Washington.

Keynesianismo militar

Uno de los elementos centrales de la estrategia nacionalista-americana es profundizar el keynesianismo militar: déficit y endeudamiento público para financiar la expansión superlativa del presupuesto de Defensa y, de esta manera, impulsar el complejo industrial-tecnológico-financiero-militar del Pentágono, núcleo central de la economía nacional estadounidense. Ello explica, en parte, el aumento anual de 13,1% en las erogaciones de Defensa entre 2017-2018. Además, sostener la supremacía militar se vuelve crucial y, para ello, es necesario invertir enormes sumas en actualización armamentística, especialmente cuando potencias como Rusia y China muestran grandes avances.

Por otro lado, la creación de una Fuerza Espacial como una nueva rama de las Fuerzas Armadas no sólo busca desarrollar capacidades en ese plano del enfrentamiento bélico sino también impulsar desde allí la tecnología aeroespacial, junto con las grandes corporaciones privadas, en el momento en que China está planeando desafiar a Estados Unidos en esa rama tecnológica-industrial. La asunción del ingeniero y ex directivo de Boeing, Patrick Shanahan, primero como subsecretario de Defensa en 2017 y más tarde como Secretario de Defensa en lugar de James Mattis, parece tener este sentido. Ello se aprecia también con la asunción de Mike Pompeo, estrechamente ligado a Koch Industries (conglomerado industrial ligado a manufacturas, refinación y distribución de petróleo, química, etc., cuyos ingresos provienen en un 50% del mercado estadounidense) y miembro del movimiento conservador radical Tea Party. Pompeo desarrolló la firma aeroespacial Thayer Aerospace, ligada al complejo industrial-militar del Pentágono y fue presidente Sentry International, un fabricante de equipos para campos petroleros donde también fue socio de Koch Industries. Por otro lado, la salida de Mattis, junto con la de Rex Tillerson y la de John Kelly indican un debilitamiento del ala conservadora tradicional y un fortalecimiento del nacionalismo conservador más radical e industrialista.

En cuanto a sus aliados tradicionales de Europa y Japón, Estados Unidos exige, con mayor moderación en el caso de los globalistas y con agresividad los nacionalistas-americano, el aumento sus gastos militares gran parte de los cuales deben fluir hacia el complejo industrial-militar esta-

dounidense mediante la compra de armamentos. Trump además reclama no sólo que llegue a 2% del PIB el gasto militar de los países miembro de la OTAN, sino que debería ser de 4% del PIB el tributo imperial de protección.

Washington también busca obligar a sus aliados a negociaciones comerciales en detrimento de sus intereses (como por ejemplo la exigencia para que Alemania renuncie al gasoducto Nord Stream 2 para proveerse de mayor cantidad de gas ruso) y a alinearse unilateralmente a los intereses geopolíticos y a la geoestrategia de la nueva administración estadounidense.

Con esta presión, el nacionalismo-americanista pone en crisis la propia OTAN, crisis que se corresponde en el plano político militar a lo que sucede en otras cuestiones a causa del unilateralismo: la crisis en la OMC, la retirada del Acuerdo de París, la ruptura del acuerdo sobre el plan nuclear de Irán, el retiro de la UNESCO, etc. Tanto en lo comercial como en lo político militar, exalta el bilateralismo en las negociaciones, en las cuales Estados Unidos puede imponer su enorme poderío relativo y, por lo tanto, imponerse de manera unilateral.

Además, el nuevo gobierno estadounidense anuncia una redefinición de la geoestrategia frente a las potencias re-emergentes (China y Rusia), dejando de lado las grandes alianzas comerciales en las periferias Euroasiáticas, junto a la centralidad de las guerras "híbridas", la expansión de la OTAN y una alianza militar similar promovida para Asia Pacífico e Índico. Ahora se ubica a China y a Rusia explícitamente como principales rivales (aunque algunas líneas del gobierno y el propio Trump busquen un acer-

camiento con Rusia para enfrentar a China). Con ello, vuelve a ubicar a la lucha entre estados en primer lugar, dejando de lado los enemigos difusos que se correspondían con la borrosidad globalista de las fronteras estatales. Además, vuelve a identificar a la región del Medio Oriente como escenario principal de la disputa mundial (en lugar del giro hacia Asia-Pacífico de Obama), y a enfocarse especialmente en el enfrentamiento con Irán y sus aliados. A ello se le suma la apuesta a un "gran Israel" que desequilibre la ecuación de poder en dicha región y retomar los formatos más convencionales de la guerra (lo que no implica abandonar los otros).

Trump y la guerra comercial

Trump ha declarado la guerra comercial al mundo. Con ello, se puso en marcha una profundización de la política proteccionista de Estados Unidos y un bilateralismo comercial que busca proteger a las fracciones de capital y ramas retrasadas en la economía global y fortalecer la producción industrial de Estados Unidos frente a China, pero también frente a aliados como Alemania, Japón o México. Los objetivos son reequilibrar el déficit comercial (agravado por las políticas de hiper-estímulos de la administración Trump y el keynesianismo militar) y, sobre todo, reforzar la "seguridad nacional" (ya que la industria es la base de la defensa) y asegurar los monopolios tecnológicos estadounidenses frente a sus rivales. En el último discurso del Estado de la Unión, Trump fue particularmente enfático en la promesa sobre importantes inversiones en las próximas industrias tecnológicas de importancia estratégica.

Luego del primer año de gobierno de Trump, el déficit comercial subió entre 2016 a 2017. Con China fue de 375.100 millones de dólares. Frente a ello, el gobierno de Trump demandó a China una reducción de 100.000 millones de dólares en sus exportaciones, tratando de imitar al gobierno de Reagan en los ochenta cuando se "obligó" a ello a Japón y a financiar al Tesoro norteamericano. El problema es que China no es un protectorado político-militar como Japón, su escala es mucho mayor (ya superó a Estados Unidos en PIB a paridad de poder adquisitivo) y la alianza con Rusia fortalece su posición político-estratégica en Eurasia.

La razón central del enfrentamiento comercial con China es detener su drástico ascenso global. Para ello, el trumpismo considera que debe frenar el "alarmante" plan de desarrollo tecnológico Made in China 2025, que tiene entre sus principales objetivos solucionar el retraso relativo en algunas ramas tecnológicas fundamentales, como robótica, semiconductores e industria aeroespacial, y ampliar el liderazgo en otras, como inteligencia artificial y autos eléctricos. De concretarse el plan, aunque sea de forma parcial, se terminaría de quebrar la relación centro-periferia del gigante asiático con el Norte Global, poniendo en crisis la división internacional del trabajo y las jerarquías en la economía capitalista mundial y planteando un desafío sistémico: que un país con más del 20% de la población planetaria se convierta en centro desarrollado.

Lo que está en juego para el trumpismo es la primacía geopolítica a largo plazo de Estados Unidos. Así lo expresa el intelectual y funcionario de la admi-

nistración Trump, Peter Navarro, en su libro del año 2011 *Death by China: Confronting the Dragon - A Global Call to Action*. La primacía estadounidense sólo puede lograrse a través de un equivalente del siglo XXI del Informe sobre Manufacturas de Alexander Hamilton de 1791, en donde se decidan qué industrias son esenciales para la seguridad nacional, junto con una política tecnológica-industrial planificada para asegurar de que esas industrias vitales permanezcan en el país, complementadas por un fuerte proteccionismo y una guerra económica con los rivales.

La guerra comercial tiene como trasfondo la creciente "guerra" económica, en la cual se agudizan las luchas entre capitales mediadas por los estados. El contexto de bajo crecimiento en el Norte Global desde la crisis financiera global de 2007-2008, profundiza esta situación y su perspectiva. Al haber bajo crecimiento la acumulación de los capitales particulares se da en detrimento de los más retrasados y de los trabajadores. Los capitales globales acumulan en los territorios emergentes que crecen (particularmente China), posibilidad que no tienen los capitales dependientes de la economía nacional estadounidense. Pero a su vez, el proceso conocido como globalización económica, por el cual el comercio mundial se expandió al doble del PIB mundial y la inversión extranjera directa al triple durante casi 30 años, se detuvo con la crisis que estalló en 2008, poniéndose de manifiesto un límite estructural.

El poco crecimiento que hubo en el Norte global en los últimos años se produjo gracias a las políticas hiper-expansivas de los Bancos Centrales. Esa política está encontrando sus límites,

creando una enorme burbuja en los bonos públicos, que posiblemente estalle en uno o dos años. Se observa una crisis próxima, que puede desplegarse sobre un ciclo de crisis mucho más profundo debido al agotamiento del ciclo expansivo (A) de Kondratiev iniciado en 1994 y a las tendencias estructurales de la economía capitalista. Ello pronostica una agudización de las luchas económicas que, de acuerdo a como se desarrolle y se "resuelva", va a alimentar la grieta en los Estados Unidos, la guerra económica a nivel mundial y la lucha entre polos de poder en todos los planos.

El declive estadounidense no es ni será pacífico y promete agudizar el caos sistémico. Uno de los peligros más acuciantes es que el imperialismo nacionalista-americano convierta a América Latina, a partir del conflicto con Venezuela, en un nuevo Medio Oriente.

Trump y Venezuela

Carlos Eduardo Martins (IRIDI/LEHC-UFRJ, Brasil)

La elección de Donald Trump representa una inflexión en la globalización neoliberal, iniciada en los años 1980 por Ronald Reagan, que ha manifestado señales de agotamiento con la pérdida de velocidad de la expansión del comercio internacional, la retracción de los flujos internacionales de capitales y la caída de las tasas de crecimiento del PIB mundial, impulsando la crisis del liberalismo global, que afecta al centro-izquierda y la centroderecha. Esta crisis se establece en particular en los centros tradicionales de la economía mundial, como Estados Unidos y Europa Occidental, donde se combinan dos efectos: la transferencia des-

de hace décadas del dinamismo productivo hacia el este asiático y China, o, de forma sectorial, para plataformas de exportación de las grandes corporaciones transnacionales, como en México, lo que contribuye a nivelar los salarios nacionales de esos centros hacia abajo y elevar sus niveles de desempleo; y el nuevo contexto internacional que se impone en los años 2010, cuando la crisis financiera, la recesión y la lenta recuperación evidencian las desigualdades acumuladas y la ineficacia de las políticas de lucha contra la pobreza.

Se proyecta en ese vacío político entonces una derecha proteccionista, populista y políticamente antiliberal que se lanza contra las presiones competitivas de la globalización. Ella busca restringir la circulación de mercancías, cuando destruye parcialmente la base industrial en los países centrales, y los flujos migratorios, cuando elevan la disputa por empleos e inciden sobre las condiciones de vida de los trabajadores nacionales. Se trata, sin embargo, de un programa defensivo incapaz de revertir el declive de los viejos centros imperialistas y, por eso, no rompe con la globalización financiera, apoyándose en la sobrevaloración cambiaria que proporciona una riqueza independiente de su soporte material. Presenta el excedente económico como escaso, se orienta para garantizar privilegios y asume su expresión mundial más agresiva y articulada en el gobierno Trump. Este se dirige contra el universalismo liberal, poniéndose contra el multilateralismo, los organismos internacionales de solución de controversias y la internalización de los costos de protección al medio ambiente. Se aleja de los costos de la hegemonía y de la protección mundial al cobrar mayor compromiso financiero

de los países de la OTAN, al reducir la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán y Siria, al tratar aliados, como la Unión Europea, como competidores en asuntos comerciales y a los Estados dependientes fronterizos y subordinados como bombas migratorias permanentes que deben ser desactivadas con políticas de apartheid. Establece aún sanciones económicas y amenazas crecientes contra los principales competidores, como China y Rusia, y mantiene fuerte hostilidad contra el nacionalismo en los países periféricos y semi-periféricos.

Si el imperialismo unilateral de Trump se aleja del universalismo liberal vinculado a la hegemonía, lo hace para asumir, sin embargo, otro formato, más territorialista y competitivo. La disminución de su presencia mundial se ve compensada por el refuerzo de la violencia interestatal a nivel regional. Se trata de un movimiento típico de un imperialismo que, afectado por el liberalismo global, busca relanzarse recurriendo al control territorial y a la reconquista de su "espacio vital" amenazado. El lema *America First* que sintetizó la campaña de Trump debe ser leído a la luz de la renovación de los objetivos imperialistas presentes en las Doctrinas del Destino Manifiesto y en las políticas del *Big Stick*, que permearon el expansionismo estadounidense desde la guerra con México en 1846, pasando por la toma del Imperio colonial español en las guerras de 1898, el Corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe (1904), las intervenciones y ocupaciones militares en el Caribe, Centroamérica y Colombia/Panamá, hasta la revocación de la Enmienda Platt en 1934. En lugar de la política de buena vecindad, donde el país el hegemónico en

ascensión asume pretensiones mundiales y desplaza su frontera de expansión lejos de su espacio vital, lo que se tiene ahora es el movimiento inverso, de retracción para defenderse del declive. El significado de la ruptura representada por Trump en la política exterior estadounidense ha preocupado al establishment liberal y se expresa en publicaciones recientes de *Foreign Affairs*, que buscan responder si esta representa una desviación provisional del orden liberal, o una tendencia hacia una orden iliberal, que ya se había establecido de forma más embrionaria en gestiones anteriores.

La ascensión de las izquierdas en el Cono Sur, durante los quince años que iniciaron el siglo XXI, se ha convertido en un fuerte obstáculo a las pretensiones estadounidenses de relanzar su imperialismo, recurriendo al control de las fuentes de minerales estratégicos, biodiversidad, fuerza de trabajo y mercados de su espacio geopolítico de influencia y de proyección mundial. La vinculación de esta zona de influencia a un proyecto de integración regional soberano sudamericano, latinoamericano y caribeño fuertemente articulado al liderazgo chino y ruso en la construcción de un nuevo eje de poder mundial constituye una amenaza aún mayor. Los golpes de Estado en Paraguay (2012) y en Brasil (2015), reconocidos inmediatamente por el gobierno estadounidense y articulados con sus sectores de inteligencia por las oligarquías de estos países, configuran parte de una estrategia en curso de desmonte de la izquierda sudamericana. Esta estrategia se manifiesta aún en el proyecto de conversión de Estados Unidos en potencia industrial petrolera, en implementación a partir de 2008, elimi-

nando su déficit en la cuenta de hidrocarburos, transformando la periferia latinoamericana en exportadora de crudo a bajo precio y anulando la política de nacionalización e industrialización de recursos naturales de los últimos 20 años. Para ello se hace fundamental el desmonte de PEMEX, impuesto durante los gobiernos neoliberales, de Petrobrás, en curso tras el golpe de Estado en Brasil, y de PDVSA, con el cerco financiero a Venezuela y la deposición del gobierno Maduro.

Venezuela pasa a tener importancia estratégica para el imperialismo estadounidense, sea por poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, sea por ser la experiencia de izquierda más avanzada en América del Sur, o por su alto nivel de internacionalización, articulándose a la construcción de un nuevo eje geopolítico regional y mundial. En la lista de reservas mundiales de petróleo, Venezuela se destaca en el liderazgo global con 301 mil millones de barriles con alcance de 362 años a partir de la producción nacional, mientras que las de Estados Unidos, 10 veces menores, se agotan en una década. El país, durante la República Bolivariana, introdujo la democracia participativa y realizó 24 elecciones, convirtiéndose en referencia regional y mundial de legitimidad hasta las elecciones legislativas de 2016. Se destacó como líder de la cooperación internacional, dedicándole el 1,5% de PIB en el período dorado del chavismo, y estableció una agenda de integración regional que desafió los esquemas neoliberales, impulsando el ALBA, Petrocaribe y Telesur, que enfrentó el monopolio mediático del gran capital. Profundizó las relaciones comerciales y financieras con China y Rusia, destinado a una parte expresiva de la producción

de petróleo a la primera y comprando armas, principalmente, de la segunda, con quien ha profundizado la cooperación militar. Tal escenario se vuelve alarmante para Estados Unidos cuando se tiene en cuenta el fuerte avance de los gastos militares rusos y chinos en relación a los suyos en el siglo XXI.

Después del intento fallido de golpe de 2002, los gobiernos de Estados Unidos establecieron sanciones económicas y políticas a la República Bolivariana de Venezuela, buscando, al inicio, su desgaste y cerco diplomático. Las sanciones empezaron en el gobierno de Bush hijo que prohibió el comercio de armas con Venezuela en 2006, pero se profundizaron en el gobierno de Obama con la orden ejecutiva 13692, de marzo de 2015, que declaró situación de emergencia nacional en Venezuela y la consideró una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Obama impuso sanciones diplomáticas contra 65 venezolanos que estarían "violando" los derechos humanos y amenazando la "sociedad civil" y congeló activos de 7 de ellos. En el gobierno Trump, sin embargo, el cerco asume dimensión política y financiera y su objetivo principal es la desestabilización y el derrocamiento del gobierno Maduro. Trump restringe, en agosto de 2017, el acceso del gobierno venezolano al mercado financiero estadounidense, y establece sanciones contra 58 miembros del gobierno venezolano, incluyendo a Maduro y 8 miembros de la Corte Suprema. En 2018, prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense o que opere dentro de Estados Unidos, comprar títulos de deuda del gobierno venezolano y de PDVSA, o hacer transacciones con sus monedas digitales. En 2019, bloquea los activos de PD-

VSA en Estados Unidos, prohibiendo transacciones financieras con los mismos. Permite que las subsidiarias de PDVSA (CITGO y PDVH) y otras compañías estadounidenses importen petróleo de Venezuela hasta el 28 de abril de este año, siempre que el pago se deposite en una cuenta bloqueada bajo control del gobierno de los Estados Unidos.

No obstante, el acto más agresivo de la diplomacia imperialista de Trump fue el de lanzar al inexpressivo Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela, a partir de una llamada telefónica de Mike Pence, tal como informó el Wall Street Journal, y articular su reconocimiento internacional. La clave para ese reconocimiento fue la actuación del Grupo de Lima, creado en 2017, donde Estados Unidos participa informalmente, orientando las acciones de los gobiernos neoconservadores y neoliberales de América Latina y Canadá. Procedente de las protestas estudiantiles de 2007, protegido de Luiz Enrique Berrizbetia, ex director del FMI, Guaidó estudió en Washington tras graduarse en Caracas y recibió entrenamiento de agencias internacionales especializadas en desestabilización, como la CANVAS y el Otpor, habiendo participado activamente en las Guárimbas.

El reconocimiento de Guaidó como Presidente interino por parte de la comunidad internacional abre el espacio para facilitar una invasión militar extranjera sobre Venezuela, tratada retóricamente como la liberación de una usurpación. Ante la correlación interna desfavorable, Guaidó se pronunció afirmando que no descartaba "autorizar" una intervención extranjera. El veto del Senado estadounidense a la intervención en Venezuela, cons-

tituye un límite en esta dirección, aunque no absoluto, pues nunca hubo un Presidente en Estados Unidos responsabilizado por violar al War Power Act. Desde su establecimiento en 1973, Reagan lo violó al invadir Granada sin autorización del Congreso, Clinton por haber bombardeado el Kosovo por más tiempo que los 60 días autorizados, Obama por intervenir militarmente en Libia sin autorización y Trump por lanzar misiles en Siria en 2017, en las mismas condiciones. A pesar de la declaración del grupo de Lima en apoyo a una solución pacífica, descartando una intervención extranjera, las presiones del imperialismo unilateral de Trump, elemento más dinámico de esta concertación, son por un mayor compromiso de sus aliados regionales en el derrocamiento del gobierno de Maduro. Segmentos del trumpismo, representados por Steve Bannon, han apoyado a los sectores más ideológicos del gobierno Bolsonaro en esta dirección y criticado el pragmatismo y cautela de los militares brasileños, expresado en las afirmaciones del vicepresidente y General de la Reserva, Hamilton Mourão. No obstante, la resistencia interna de los militares venezolanos y de gran parte de la población, así como el apoyo de Rusia y China al gobierno de Maduro, constituyen fuertes escollos a esta alternativa que puede transformar a América del Sur en el epicentro de un conflicto regional y mundial de vastas proporciones

Guaidó ha anunciado la implementación de un programa económico donde pretende obtener 2.000 millones de dólares de ayuda humanitaria inmediata y 20.000 millones de dólares de donación de Estados Unidos y Unión Europea a cambio de la privatización de 3.000 empresas,

de la derogación de la ley de hidrocarburos y de la subordinación de Venezuela a los paquetes de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial. El intento de utilizar la ayuda internacional como instrumento de penetración militar extranjera, corrupción y desestabilización interna ha llevado al aumento de las tensiones.

El desenlace de la situación venezolana tendrá un importante efecto para la disputa del poder mundial y para el balance de las fuerzas políticas en América Latina. El eventual derrocamiento del gobierno de Maduro significará el avance del imperialismo territorialista y sin hegemonía de Estados Unidos en la región. Será el primer paso para derribar lo que el gobierno Trump llama de "Troika de la Tiranía", constituido por los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también para contener y desestabilizar a los gobiernos nacionales populares, como los de Bolivia y México, y las democracias, criminalizando a los movimientos sociales y las izquierdas, y ampliando las bases militares estadounidenses en América del Sur, en particular en el espacio amazónico. Tal alternativa afectaría profundamente el proyecto del BRICS y del Sur Global, desconectando China y Rusia de la región, restringiéndolas por un largo tiempo, en gran medida, a la disputa por el espacio afroasiático.

Si el Gobierno Maduro se sustenta, podrá ampliar sus lazos regionales, aprovechándose del probable desgaste de las fuerzas neoconservadoras en los próximos años, como demuestran la elección de Manuel López Obrador y la crisis del gobierno argentino de Macri, así como profundizar sus relaciones geopolíticas con los BRICS, buscando retomar

su dinamismo económico, político, social e ideológico.

La guerra declarada de Estados Unidos contra Venezuela

Marco A. Gandásegui, hijo (Coord. GT de Estudios sobre Estados Unidos de CLACSO, Investigador asociado del CELA, Panamá).

Hemos dividido este aporte en cuatro partes. En primer lugar, queremos situar la guerra declarada por Estados Unidos contra Venezuela en el marco de la geopolítica que caracteriza la llamada pos-guerra fría. En segundo lugar, veremos en que consiste la declaración de guerra de Washington contra la revolución bolivariana. Tercero, la guerra o lucha de clases que caracteriza el Estado venezolano. Finalmente, la relación entre la guerra contra Venezuela y Panamá.

Geopolítica

En el largo período de reacomodo pos-soviético, posguerra fría y re-alineamiento de la competencia entre potencias imperialistas, Venezuela se colocó en el epicentro del enfrentamiento que ubica a Estados Unidos de un lado y a China del otro. Las antiguas potencias imperialistas europeas se alinean detrás de Estados Unidos. Rusia fortalece su alianza con China. América latina está dividida. México, por su parte, abandonó recientemente el grupo de Lima creado por Estados Unidos.

Según Thierry Meyssan, "el objetivo de Estados Unidos no es derrocar al presidente Maduro sino aplicar en la Cuenca del Caribe la doctrina Rumsfeld-Cebrowski

de destrucción de las estructuras estatales en los países de la región. Eso exige, ciertamente, la eliminación de Nicolás Maduro..."

La doctrina Rumsfeld-Cebrowski fue hecha público en 2003. Implica convertir a la periferia del sistema mundo-capitalista en un área sin Estados-naciones, donde impere el caos y el abierto despojo de las potencias imperiales. La doctrina incluye a Medio Oriente, África y sólo excluye en América latina al Cono Sur y México. En Asia excluye a India y China. (Ver mapa)

El esquema funciona en el gran Medio Oriente. En Siria funcionó sólo en parte. En primer lugar, porque Rusia y China se opusieron en el Consejo de Seguridad de la ONU. En segundo lugar, porque el pueblo sirio apoyó al gobierno sirio y dio pruebas de excepcional resistencia. También contribuyó, el respaldo y equipamiento ruso al Ejército Árabe Sirio ante los mercenarios extranjeros y la OTAN. Por otro lado, se desarticuló la utilización por parte del Pentágono de los yihadistas para debilitar el Estado sirio.

La declaración de guerra

Estados Unidos le declaró la guerra a Venezuela en tres frentes: el económico, el ideológico y el militar. El presidente Trump se ha rodeado de los elementos más reaccionarios para encabezar su guerra contra Venezuela. Encargado directamente del asedio puso al criminal de guerra, condenado por la justicia norteamericana, Eliot Abrams. Y como su asesor de Seguridad Nacional a John Bolton, a quien en un principio rechazaba por ser una ficha del 'establishment'.

La guerra económica contra Venezuela la encabeza el Departamento de Comercio, que recrudesció en 2019 el bloqueo a la economía venezolana. Ya en 2015, el presidente Obama había declarado a Venezuela “un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Según cifras de oficiales de Estados Unidos y Venezuela, en un período relativamente corto Washington ha secuestrado US\$18 mil millones de dólares pertenecientes a Caracas. Estos incluyen depósitos en bancos norteamericanos, depósitos petroleros y de la empresa venezolana CITGO, que es la segunda distribuidora de gasolina más importante en Estados Unidos. Además, el Reino Unido rehusó devolverle a Caracas los depósitos de oro que tienen un valor de US\$2 mil millones.

La guerra ideológica contra Venezuela sigue los patrones tradicionales utilizados a escala mundial. La idea es descalificar a los gobernantes venezolanos y crear una sensación de inmadurez del pueblo de la patria bolivariana. En forma diaria, hace dos décadas y en forma más intensa en los últimos meses, se inundan los medios televisivos y de prensa escrita con mentiras sobre la realidad venezolana. Las ‘fake news’ incluyen videos, fotografías, entrevistas y noticias que tergiversan los hechos o inventan hechos inexistentes.

La estrategia militar pensada por Estados Unidos contra Venezuela consiste en lo que el general Powell describió durante la invasión a Panamá y la guerra contra Irak como “guerra total”. Es decir, lanzar un ataque tan grande que rompe toda resistencia militar posible. Las tácticas para alcanzar estos objetivos incluyen la utilización de fuerzas armadas de países vecinos para distraer a

las fuerzas armadas bolivarianas. Enviar desde bases en Panamá y otros lugares supuestas ‘ayudas humanitarias’ con el propósito de complementar la limpieza militar.

En estos momentos, Estados Unidos no puede movilizar tropas por tierra ni fuerzas navales. Su ataque inicial sería aéreo con el fin de pulverizar ciudades y pueblos antes de enviar tropas y mercenarios por tierra. La guerra total consiste en destruir el país, siguiendo el patrón utilizado en Afganistán, Irak, Libia y Yemen. Sin embargo, fracasaron en Siria y lo mismo ocurrirá en Venezuela.

La guerra interna

Desde la época de la Colonia Venezuela ha estado en guerra, con mayor o menor intensidad, como los demás países de la región latinoamericana. Guerra de clases, lucha de clases y resistencia anticolonial y antiimperialista. Hace 200 años Bolívar se enfrentó a la oligarquía aliada a los españoles y los derrotó (aunque los cachacos regresaron con venganza dividiendo las fuerzas de Bolívar y enviándolo al exilio interno y muerte). Cipriano Castro hace poco más de un siglo también fue enviado al exilio por Juan Vicente Gómez que, utilizando los ingresos del petróleo descubierto en la década de 1920, creó un Estado oligarca hasta mediados del siglo XX. Las capas medias organizadas en el contexto del período del boom petrolero pusieron fin al régimen oligarca. Los gobiernos surgidos de las alianzas con las clases medias no contribuyeron a resolver las contradicciones del Estado venezolano. La fiesta petrolera continuó bajo otro régimen, hasta 1998 con el triunfo electoral del presidente Hugo Chávez.

Chávez proclamó la revolución bolivariana. De inmediato se realinearon las fuerzas sociales. La vieja y nueva oligarquía, así como sectores de las capas medias formaron un bloque con Estados Unidos para desalojar a Chávez y a los bolivarianos.

La ‘guerra total’ de Estados Unidos sólo puede ser derrotada por una estrategia de movilización total. Las tres fases de la movilización total son contención, división y expulsión. Los ejemplos de Cuba y Vietnam son elocuentes. La oligarquía y las capas medias sólo tienen como objetivo apropiarse de las riquezas, no tienen proyecto nacional o bolivariano. Su único aliado es Estados Unidos y cuenta con las simpatías cobardes de las oligarquías de la región. Es un aliado, sin duda, muy poderoso. Sin embargo, con una estrategia bien concebida Venezuela puede contener el ataque, dividir al enemigo y expulsarlo.

Las líneas de ‘reabastecimiento’ de la oligarquía y los sectores de las capas medias traidoras con los sectores populares que constituyen la vasta mayoría de la población se quebraron con el ‘caracazo’ de 1989. El objetivo de Chávez a partir de su triunfo electoral en 1998 fue desarrollar una política incluyente que hiciera que todos los venezolanos se beneficiaran del boom petrolero. Sus herederos – con el presidente Maduro a la cabeza – pretenden hacer lo mismo.

Venezuela bolivariana cuenta con aliados latinoamericanos y del Caribe – una mayoría – y con todos los pueblos de la región. Además, a escala mundial cuenta con los pueblos del Tercer Mundo y algunas potencias como Rusia y China.

Panamá y Venezuela

A pesar de los avances significativos realizados por Panamá para afianzar su soberanía en la segunda mitad del siglo XX, después de la invasión militar norteamericana en 1989 los gobiernos han sido subordinados nuevamente a las demandas de Estados Unidos. En lo político sigue la línea del Departamento de Estado. A pesar de considerarse 'neutral' frente a los conflictos internacionales, Panamá se sumó al grupo de Lima creado por Estados Unidos para aislar y desestabilizar al gobierno bolivariano de Venezuela. En lo económico, se encuentra bajo la tutela del Departamento de Comercio estadounidense. Recientemente, el gobierno fue obligado a aprobar la legislación que pone su sistema fiscal bajo órdenes de Washington. Poco después tuvo que expulsar de su lista de 12 mil barcos bajo la bandera de conveniencia panameña a las naves de propiedad iraní. En lo militar, coordina estrechamente con el Comando Sur, que financió y construyó una docena de bases

aeronavales sobre ambas costas panameñas.

En un comunicado emitido en enero de 2019, la Cancillería panameña 'condenó' lo que considera la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro asumiera el poder para un segundo periodo. Al mismo tiempo, la canciller panameña, Isabel de Saint Malo, no descartó que el país pudiera adoptar nuevas medidas en contra del gobierno del presidente Maduro.

Las declaraciones del gobierno panameño, sin embargo, no tienen mayor sustento. Son simulaciones frente a las presiones de Washington. A diferencia de 2018, cuando rompió relaciones con Caracas, el gobierno panameño en esta ocasión se abstuvo de hacer lo mismo. Las relaciones comerciales entre empresarios panameños y el mercado venezolano son muy importantes para que el presidente Juan Carlos Varela tome una decisión de ese tipo.

Según la Cancillería, "romper relaciones diplomáticas con el país sudamericano afectaría los intereses económicos y comerciales del Istmo". Las exportaciones panameñas a Venezuela incluyen una amplia variedad de productos – especialmente de China - que re-exporta la Zona Libre de Colón. También suspendería los vuelos de la línea aérea COPA que representa un fuerte ingreso para el grupo económico más poderoso del país.

A pesar de que el gobierno panameño 'condenó' a Venezuela en enero, la embajada y el consulado del gobierno bolivariano sigue atendiendo al público normalmente. La cancillería panameña también recibió – desconociendo la Constitución Política - a una representante de la Asamblea Nacional venezolana (no reconocida por la Corte Suprema de Venezuela y declarada en desacato) que dijo ser enviada por el autoproclamado 'presidente interino' del país bolivariano. A pesar de no tener oficina, recursos propios y sin apoyo, cuenta con el respaldo de la em-



bajada de Estados Unidos. Este respaldo y el haber sido recibida por la Cancillería le permite desplazarse por la capital.

A pesar de la solicitud de Estados Unidos para reforzar el aparato militar que eventualmente encabezaría una invasión armada, los países de la región aún no han respondido. En el caso de Panamá, hasta el momento el gobierno no ha comprometido sus dos regimientos militares creados después de la invasión por el Pentágono y entrenados por Israel. En una conferencia de prensa, la vicepresidenta de Saint Malo resaltó que en "Panamá se inauguró el primer Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, con el que se fortalece el rol logístico del país". Colombia, Brasil y Curaçao (una colonia holandesa en el Caribe) están apoyando a Estados Unidos en su táctica de llevar contendores a la frontera cerca de Cúcuta en Colombia como parte de la llamada 'guerra humanitaria'. Panamá todavía no ha entrado en acción. A su vez, un avión norteamericano que partió de Puerto Rico con destino a Venezuela nunca llegó a su destino. Washington no ha informado aún cual fue su paradero.

Los sectores populares panameños han manifestado su rechazo a la política entreguista de la cancillería panameña. Estudiantes, obreros y otros sectores han mostrado su solidaridad con la revolución bolivariana. El Frente Amplio por la Democracia (FAD), partido político que aglutina a los intereses de los trabajadores, también ha manifestado su apoyo. En cambio, los partidos políticos de la oligarquía han optado por una posición de silencio. Por un lado, no quieren provocar a Washington con cualquier pronunciamiento que no sea de

condena. Por el otro, sin embargo, temen crear problemas con los sectores económicos que comercian con Venezuela.

En mayo se celebran elecciones en Panamá y ya han sido oficializados siete candidatos para la Presidencia de la República. Los tres partidos dirigidos por intereses oligarcas tienen discursos sin contenido pero que reflejan los intereses neoliberales. Han estado en el poder desde 1989 y han creado una estructura que responde a las políticas de desregulación, privatización y flexibilización de la fuerza de trabajo. El único partido político que levanta una bandera reformista es el FAD. A diferencia de los partidos oligarcas reivindica la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hay otros tres candidatos que se presentan utilizando el mecanismo de la libre postulación. El FAD es el único partido político que expresa públicamente su condena a la agresión norteamericana contra Venezuela.

Los medios de comunicación masivos (televisión, radio y prensa escrita) se han plegado a la propaganda estadounidense. Llenan sus noticieros con información de los servicios mediáticos de Estados Unidos que citan constantemente las palabras del presidente Trump quien asegura que "una invasión militar es una opción que tiene sobre la mesa". En las redes virtuales hay un enfrentamiento permanente entre los partidarios de una intervención militar por parte de Estados Unidos contra Venezuela y los que promueven el diálogo y la paz.

Aunque los medios panameños recogen de manera masiva todas las noticias falsas que envía Estados Unidos, restringen el debate

en torno a la cuestión venezolana. Los voceros que promueven la posición de Washington son pocos y muy bien escogidos. Existen algunos columnistas que – al contrario - prestan su pluma para defender la revolución bolivariana.

Las elecciones en mayo arrojarán como ganador uno de los candidatos de los tres partidos oligarcas. Su posición frente a la guerra declarada por Estados Unidos contra Venezuela continuará siendo la misma que la del actual gobierno. Es decir, seguir comerciando con Venezuela, incluso en tiempos de guerra. Los gobernantes panameños, que son un reflejo de los intereses oligarcas, no tienen interés y rechazan la idea de reconstruir una plataforma nacional incluyente para hacer respetar la soberanía del país. En el caso de Venezuela, Estados Unidos no respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos y dicha situación expone a Panamá a ser objeto de ataques militares provenientes del extranjero, como lo fuimos en 1989 por parte del propio Estados Unidos.

"Jamás... una intervención armada": Estados Unidos, Venezuela y la posición uruguaya

Roberto García (Profesor Adjunto de la UdelaR, Uruguay).

No es necesario ser demasiado perspicaz para advertir que los hechos de estos últimos días sugieren que la administración de Donald Trump ha intensificado sus acciones para quebrar definitivamente a la Revolución Bolivariana. Estados Unidos ya lo ha intentado en numerosas ocasio-

nes, empleando medios abiertos y encubiertos. Fue muy visible en 2002, cuando la intentona del golpista Pedro Carmona recibió inmediato reconocimiento pese a lo cual, desde las calles, movilizaciones masivas restauraron en su cargo al legítimo presidente Hugo Chávez. Desde entonces, fueron varias las derrotas cosechadas en su patio trasero, la más emblemática el rechazo al ALCA en 2005.

Actualmente, aquellos encomiables esfuerzos por una integración en clave latinoamericanista parecen enterrarse por una generación de nuevos gobernantes que, sin miramientos, exhiben y sobreactúan un alineamiento fuertemente acríptico respecto a Estados Unidos.

Con el aval de una región con presidentes como el argentino Mauricio Macri, el colombiano Iván Duque, el chileno Sebastián Piñera y el recién asumido brasileño Jair Bolsonaro, entre otros, más el acicate del selectivamente beligerante Secretario General de la OEA Luis Almagro, Donald Trump y sus asesores más duros se muestran decididos a recuperar el terreno perdido sin dudar en apelar a la antigua retórica de la "Doctrina Monroe", empleada como argumento para detener en este caso el avance de Rusia y sobre todo China en la región.

Como abiertamente lo han manifestado algunos influyentes y altos funcionarios estadounidenses, la presión sobre Venezuela puede ser parte de un conjunto de otras acciones que incluirían a Cuba y Nicaragua. La sintonía de tales amenazas con las expresiones más radicales del clan Bolsonaro -quienes no cesan de pregonar el fin de la izquierda en América Latina- son más que evidentes.

Partiendo de estas brevísimas generalidades, me permitiré ofrecer un contexto histórico mínimo para echar luz en torno a tres cuestiones. La primera contribuye a comprender dentro de un marco más amplio esta renovada actitud intervencionista de Estados Unidos en Venezuela y por sobre todo a descentrarla de lo que es la figura de un presidente hoy altamente cuestionado como Maduro. La segunda, e intrínsecamente ligada a la anterior, atiende a los actores regionales, cuyo protagonismo no debe obviarse más allá del siempre ostentoso poderío imperial de Estados Unidos. Tercera y última, un breve señalamiento sobre el proceder internacional de Uruguay en esta tensa atmósfera regional, tomando como referencia la última expresión a este respecto que fuera presentada en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU que trató la situación de Venezuela.

"Estamos con ustedes": mesianismo y paternalismo

Aunque las tramas injerencistas siempre se urden con anterioridad y suponen varias etapas, la escalada de los últimos días incluyó un video emitido por el vicepresidente Mike Pence el pasado 22 de enero. Era la previa de una nueva jornada de movilizaciones convocadas por la oposición venezolana para desconocer la legitimidad del presidente Maduro. La fecha empleada no era casual sino emblemática en la historia del país sudamericano: el 23 de enero, pero de 1958, un golpe de estado ponía fin a la dictadura del coronel Marcos Pérez Jiménez, a quien Washington había cobijado y exhibido como ejemplo para la región. En la grabación de poco más de un minuto y medio, Pence se refi-

rió a Maduro como "dictador sin derecho legítimo de poder", un "usurpador". "Al alzar sus voces mañana, en nombre del pueblo estadounidense, le decimos al pueblo entero de Venezuela ¡Estamos con ustedes!", empleando en esta última exclamación el idioma español. "Muchas gracias y vayan con Dios", completó luego, también apartándose de su nativo inglés. Junto a esas voces de aliento, el vicepresidente estadounidense indicó que el apoyo de su país se volcaba hacia la figura de un diputado hasta ese momento escasamente conocido, Juan Guaidó, integrante de la Asamblea Nacional, que según Pence constituye el "último vestigio de la democracia" venezolana. El espaldarazo fue tan decisivo que, sin tomar en cuenta los escasamente representativos 97000 votos obtenidos para ocupar la banca, Guaidó se autoproclamó y él mismo juramentó como "presidente encargado" de Venezuela. Minutos más tarde, llegó oficialmente el reconocimiento Estados Unidos y tras él, varios otros países procedieron en igual forma.

Tras ello y repitiendo sucesivas amenazas de intervención, Estados Unidos consiguió llevar el tema de Venezuela a consideración del Consejo de Seguridad de la ONU. En dicha instancia la participación quedó a cargo del Secretario de Estado Mike Pompeo, ahora secundado por Elliott Abrams, un diplomático de amplia y triste trayectoria en América Latina, nombrado por Trump para ayudar a gestionar la "democratización" de Venezuela. Su ya conocida impronta anticubana estuvo presente en el discurso de Pompeo, quien advirtió que Cuba estaba detrás del Gobierno "opresor" y "antidemocrático" de Nicolás Maduro. "Es el momento de que

todos los países tomen partido. No más demoras, no más juegos. O están con las fuerzas de la libertad o están con Maduro y su caos” sostuvo. A ello agregó un llamado “a todos los miembros del Consejo de Seguridad a apoyar la transición democrática en Venezuela y el papel que tiene en ella el presidente interino Guaidó”.

El video de Pence, la irrupción repentina del diputado Guaidó, las expresiones de Pompeo y el cerco en torno a un país latinoamericano como Venezuela encuentran amplio sentido si se las ubica en un marco más amplio. Actuar de esa manera forma parte de una muy extendida tradición política aún vigente en los Estados Unidos y ella trasciende ampliamente las fronteras partidarias entre republicanos y demócratas. Ninguna de esas y muchas otras cuestiones que han ido sucediéndose parecen disparatadas, forman parte y crudamente exhiben algunos de los componentes ideológicos que históricamente han pautado las relaciones de Estados Unidos hacia América Latina. Vale la pena subrayar que, en esta región, como ha señalado irónicamente Greg Grandin, los estadounidenses aprendieron a ser imperialistas. La arrogancia imperial para indicarle a otros países que deben pronunciarse; el paternalismo implícito del “estamos con ustedes”; el maniqueísmo que reduce las opciones a un enfrentamiento de buenos y malos; o el mesianismo para autoproclamarse como portadores de una libertad a ser extendida por los pueblos inferiores. Todo ello es parte del habitual e histórico injerencismo que en este caso particular se explaya vivamente en un país cuya débil institucionalidad

es histórica y donde tradicionalmente Estados Unidos ha incidido en sus asuntos internos, en buena medida como parte de su respaldo a empresas petroleras norteamericanas, que dicho sea de paso pasaron a afincarse decididamente en Venezuela luego de ser amenazados sus intereses por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas en 1938. A este respecto resultan pertinentes los excelentes trabajos de Margarita López Maya y Gustavo Salcedo, por cierto, dos historiadores que militan en filas de la oposición.

Un precedente peligroso

El segundo apunte se ubica en la órbita regional y parte de un señalamiento personal. En los últimos quince años y como parte de una investigación de largo aliento acerca de la operación encubierta de la CIA para derribar al guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954, he recorrido numerosos archivos históricos latinoamericanos, fundamentalmente diplomáticos. Las experiencias y evidencias acumuladas enseñan que, a lo largo de la historia, los poderes imperiales necesitan y muy habitualmente acuden a los actores locales. Esta nueva ofensiva contra Venezuela no parece ser la excepción pues el belicoso Estados Unidos es secundado firmemente por varios países que, amparados en una retórica humanitaria integran una región que no precisamente se caracteriza por el respeto a la democracia y a los Derechos Humanos.

Su rol protagónico no debe perderse de vista tanto como el riesgo que implica este alineamiento automático con lo que parece constituir una nueva modalidad de golpismo estadounidense. Aunque el argumento

humanitario-democrático es poco creíble en una región que se caracteriza por una ostentosa desigualdad social y resulte hasta risible para gobernantes como Duque, Abdo Benítez, Juan Orlando Hernández o Jimmy Morales, no pueden dejar de alertarse tres cuestiones. Una, el peligroso precedente que supone acompañar con excesiva imprudencia una “autoproclamación”. Emblemática de esta premura fue la equivocación del presidente de Paraguay al pronunciar el apellido del venezolano Guaidó. Dos, y no menos desastroso, los alcances hacia los que puede derivar ese acompañamiento a una administración como la de Trump que puede necesitar de una incursión militar como parte de sus intenciones reeleccionistas. Tres, que los representantes de esta nueva derecha latinoamericana parecen ignorar, pasmosamente, que las miles de intervenciones estadounidenses en la región significaron la interrupción de procesos democráticos y ambientaron flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos los delitos de genocidio y desaparición forzada masiva.

“Jamás” una “intervención armada”

La sensatez y excepción corrió por cuenta de México y Uruguay, quienes insistieron una vez más en una salida negociada. En este complejo entramado tuvo lugar el discurso de Elbio Roselli, representante de nuestro país en el Consejo de Seguridad de la ONU. El funcionario uruguayo no es un diplomático más, posee amplia trayectoria y experiencia. Por eso sus palabras fueron elocuentes. Primero, argumentó jurídicamente por qué el tema no se encontraba dentro de la agenda, considerando que no era ese el “ámbito más conveniente” para

abordar la situación del “hermano país”. Segundo, insistió en reafirmar que la “peor solución para el pueblo de Venezuela es profundizar su aislamiento internacional”. Mediando ese “espíritu”, expresó una vez más el llamamiento de los gobiernos de Uruguay y México a todos los actores internos y externos, para evitar así una “escalada de violencia” que conduzca a “reducir las tensiones” conforme a los “principios del derecho internacional”. Compartió la preocupación de los demás integrantes por la situación de los derechos humanos, recordando que Uruguay ha procedido abriendo “las puertas...sin rechazar al migrante en la frontera”. Sin embargo, y tomando distancia de Estados Unidos, enfatizó que dicha “actitud nuestra” se ha implementado “sin levantar muros”. Por si acaso no quedaba claro, a renglón seguido expresó con contundencia que, “independientemente de las circunstancias que se invoquen, el Uruguay no respaldará jamás, en ningún ámbito, una intervención armada en ningún país de la región como pretendida solución a una crisis interna”.

Entre la “vergüenza” y la tradición

Los partidos opositores al actual gobierno en boca de la mayoría de sus dirigentes emplearon duros calificativos para juzgar la posición internacional de Uruguay. Reiterada fue la palabra “vergüenza” para describirla, aunque también se han sugerido otros cuestionamientos que apuntan a “oscuros” intereses y “fidelidades inconfesables”, todo lo cual parece encontrar sentido en el marco de una campaña electoral

donde la cuestión de Venezuela será empleada para asociar al gobierno del Frente Amplio con la “dictadura” de Maduro.

Sin embargo, tales juicios no resisten un análisis histórico de larga duración. De hecho, la posición de la cancillería parece sustentarse y encontrar sentido en una tradición internacional del Uruguay cuya vocación por el respeto al Derecho Internacional, a la solución pacífica de controversias y a la igualdad jurídica de los Estados es amplia e históricamente reconocida. Conviene indicar que en la misma fueron ambos partidos tradicionales, blancos y colorados, los que contribuyeron decisivamente a consolidarla durante todo el siglo XX.

Por ello, muy llamativa resulta la posición del Partido Nacional si se la compara con la anterior membresía de nuestro país en el Consejo de Seguridad de la ONU durante 1965. En aquella delicada coyuntura internacional -con un Brasil que en el año anterior había consumado el golpe militar contra el presidente Goulart-, le cupo al representante uruguayo y dirigente político del herreísmo, Carlos María Velázquez, lidiar con uno de los más tristes actos intervencionistas de Estados Unidos, que poco antes invadió la República Dominicana, amparándose en los tradicionales argumentos “humanitarios”. Sus altivas y fundamentadas palabras también expresadas en un ámbito de proyección global, se sustentaban en la trabajosa experiencia de defender el “principio de no intervención” en un continente donde un “tiburón” históricamente asediaba a las “sardinias”: “creo que nuestros pueblos acaso sean de los más

singularmente expertos de todos los pueblos en esta materia”. “Cada palabra, cada artículo”, proseguía Velázquez en 1965, respondía “a una experiencia”, recordaba “un infortunio del pasado y tiende a prevenirlo”. Deudora de esa digna tradición internacional, el discurso de Roselli y la insistencia en una mediación que evite tanto la intervención extranjera como una fratricida guerra civil, conviene una vez más recordar al diplomático herreísta: “resulta, pues, paradójico que se sugiera que para reafirmar la democracia y la libertad violemos el derecho y abramos la puerta a la arbitrariedad”.

El Bloqueo Económico de Estados Unidos a Cuba desde la ética en las relaciones Internacionales

Raúl Rodríguez Rodríguez (CE-HSEU - Universidad de La Habana, Cuba)

En el estudio de sanciones más grande del último siglo, *Sanciones Económicas Reconsideradas*, Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliot y Barbara Oegg definen las sanciones económicas como un “retiro deliberado inspirado por el gobierno o una amenaza de retiro de las relaciones comerciales y financieras tradicionales con fines de política exterior y de seguridad o para alterar el comportamiento de un estado que no cumple con las normas universalmente reconocidas por la comunidad internacional, con la aprobación del Consejo de Se-

¹ Gary Hufbauer, Jeffrey Schott, Kimberly Elliott and Barbara Oegg, *Economic Sanctions Reconsidered* (3rd edition), Peterson Institute for International Economics (2007)

guridad de las Naciones Unidas. Las sanciones pueden ser parciales y afectar solo a ciertos bienes o personas; o pueden ser integrales, prohibiendo la actividad comercial con respecto a todo un país¹.

Sin embargo, algunos Estados suelen imponer sanciones económicas de manera unilateral, y esto ha sido particularmente cierto en el caso de los Estados Unidos. En su extenso estudio de más de 200 episodios de sanciones durante el último siglo, Hufbauer, Schott, Elliot y Oegg concluyeron que Estados Unidos había utilizado la coerción económica mucho más que cualquier otro Estado del sistema internacional.

Esta definición es particularmente relevante para el estudio de las sanciones económicas impuestas a Cuba por los Estados Unidos, que constituye uno de los ejemplos de sistemas de sanciones que más críticas puede recibir desde la ética de las relaciones internacionales. Estados Unidos era el principal socio comercial de Cuba y la fuente singularmente importante de la inversión extranjera directa antes de 1959. No es difícil entender por qué las consecuencias económicas y sociales iniciales para un pequeño estado insular dependiente y subdesarrollado habrían sido devastadoras. El sistema de sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba ha sido definido como una verdadera guerra económica² e incluso como una estrategia política para

lograr el empobrecimiento de Cuba.

Inmediatamente después de tomar el poder en enero de 1959, el nuevo gobierno cubano dio los primeros pasos hacia la implementación del Programa Moncada. Tales acciones equivalieron a una transformación estructural fuerte y rápida que comenzó a incorporar nuevas relaciones de propiedad y clase. Estas acciones también limitaron las posibilidades de acumulación del capital privado. El gobierno cubano vio estas acciones como un medio para lograr la soberanía económica y la justicia social. A fines de 1959, la Administración de Eisenhower comenzó a articular una política basada principalmente en las sanciones económicas a Cuba, aunque no solo en ello.

El gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo adicional de la clase propietaria cubana, comenzó a aplicar gradualmente la presión económica en forma de sanciones económicas, aislamiento político y diplomático, amenazas militares y acciones encubiertas dirigidas a derrocar al gobierno.

En efecto, las sanciones económicas, coercitivas y unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, técnicamente a partir de enero de 1962 hasta el presente, han sido objeto de intenso debate en cuanto a su extraterritorialidad, su efectividad, su impacto humanitario, el efecto que han tenido en el logro de los objetivos de justicia

social y desarrollo del proyecto nacional cubano a partir de 1959.

La página del Departamento de Estado de Estados Unidos define la política de sanciones de la siguiente manera en 2019: "Estados Unidos mantienen un embargo económico integral a la República de Cuba. En febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy proclamó un embargo al comercio entre Estados Unidos y Cuba, en respuesta a ciertas medidas tomadas por el gobierno cubano, y ordenó a los Departamentos de Comercio y Tesoro que implementaran el bloqueo, que sigue vigente hoy"³.

Además de las acciones abiertas, la imposición de sanciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos ha sido identificado por otra agencia de ese gobierno de la siguiente manera: "El bloqueo a Cuba es el conjunto más completo de sanciones de Estados Unidos a cualquier país"⁴. Desde 1963 las acciones encubiertas para derrocar al gobierno cubano tuvieron la intención de causar estragos en la economía cubana. Un documento de la CIA sugiere que además de las sanciones abiertas, como medidas coercitivas unilaterales se debe aplicar un programa de crear dificultades que causen efectos adversos al mercado cubano y a la economía de la Isla.

Con el fin del bipolarismo en el orden mundial de las relaciones internacionales a partir del colapso de la Unión Soviética, Cuba perdió las condiciones de intercambio preferencial que los países de menor desarrollo tenían dentro del CAME. Con

² Lamrani, Salim, *Economic War against Cuba: A Historical and Legal Perspective*, NYU Press, New York 2013; Zaldivar, Andrés, *Bloqueo. El asedio más prolongado de la historia*, Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2003.

³ <https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/cuba/>

⁴ GAO (United States Government Accountability Office), "Economic Sanctions: Agencies Face Competing Priorities in Enforcing the U.S. Embargo on Cuba." GAO Report 08-80, November, 2007.

ello la economía cubana experimento la mayor crisis del periodo revolucionario. En este contexto el gobierno de Estados Unidos reforzó su sistema de sanciones.

Con el obvio objetivo de acelerar un cambio de régimen en Cuba, el senador Robert Torricelli (D-N.J.) presentó una nueva legislación conocida como Ley de Democracia Cubana (CDA) en 1992. En ella declaró explícitamente como su objetivo “buscar una transición pacífica a la democracia en Cuba a través de la aplicación de sanciones económicas con un mayor alcance extraterritorial. Reimpuso la prohibición del comercio con Cuba con filiales de empresas estadounidenses en terceros países, que el presidente Ford había levantado en 1975 y ascendía a \$ 718 millones en 1991.

Esta legislación esencialmente reforzó las sanciones estadounidenses contra Cuba al aumentar las restricciones a la ayuda humanitaria, específicamente alimentos, medicinas y suministros médicos; denegando la entrada a los puertos de Estados Unidos a cualquier embarcación que habría tocado puerto cubano en los 180 anteriores a su entrada a puerto estadounidense; y autorizando el uso de sanciones contra terceros Estados que ofreciesen ayuda Cuba. El propio Torricelli declaró que su intención era “causar estragos en esa isla”, lo que refuerza la idea que el sistema de sanciones en ese momento trata de ser lo más abarcador y extraterritorial posible. Es indudable que esta acción

del gobierno de Estados Unidos no se puede catalogar de sanción inteligente o selectiva, por que busca no solamente afectar la economía de Cuba, si no que procura entorpecer los esfuerzos del Gobierno de Cuba para reinsertarse la economía mundial en el nuevo contexto.

La Ley Helms Burton de 1996⁵ fue una pieza más el sistema de medidas económicas coercitivas unilaterales que buscó ser aún más abarcador, no selectivo, ni inteligente y reforzó la extraterritorialidad de las sanciones. Como lo dijera uno de sus patrocinadores el senador Jesse Helms, se trata de decirle a los demás países: “Uds. pueden comerciar con nosotros o con Cuba, pero no con los dos.

Ambas leyes en lo fundamental están dirigidas a atacar las fortalezas y a incrementar las vulnerabilidades de Cuba. No son sanciones inteligentes, de acuerdo con la teoría y la narrativa de los que apoyan este tipo de sanciones. Son buscan socavar la funcionabilidad de sistemas completos, atacar los sectores más importantes de la economía y entorpecer los esfuerzos del país objeto de las sanciones en este caso Cuba por hacer que las sanciones sean inefectivas.

Sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba en un nuevo contexto posterior a diciembre de 2014

El 17 de diciembre de 2014, el Presidente de Cuba y el Presidente de los Estados Unidos anun-

ciaron el inicio de un proceso de normalización de sus relaciones bilaterales. Esta fue una acción sin precedentes y en muchos aspectos muy importante. A partir de esa fecha se lograron avances significativos en el plano político y diplomático y algunos acuerdos que tuvieron cierto impacto económico en Cuba. Sin embargo, el sistema unilateral de sanciones económicas de los Estados Unidos se mantuvo básicamente en vigor, a pesar de algunos cambios regulatorios adoptados por el poder ejecutivo.

Se mantuvo el bloqueo financiero y la prohibición del uso del dólar estadounidense en transacciones comerciales internacionales, lo que aumenta los costos, hace necesario recurrir a terceros mercados o intermediarios y perpetúa el llamado “riesgo de Cuba”, que desalienta a los posibles inversionistas. Una revisión de las acciones de cumplimiento del Departamento del Tesoro que involucran a Cuba muestra ocho casos de sanciones desde que Estados Unidos y Cuba comenzaron a normalizar las relaciones. Las multas impuestas desde el inicio del acercamiento totalizaron \$ 5.278.901, según la OFAC⁶.

A partir de 2017, la administración Trump ha promovido la competencia estratégica interestatal con un enfoque realista basado en los resultados, que pone a los intereses de Estados Unidos primero. En términos concretos, la administración Trump ha aplicado proteccionismo selectivo y el uso o la amenaza de sanciones económicas como arma de

⁵ Denominada así por sus impulsores, el senador republicano Jesse Helms y el diputado demócrata Dan Burton. Nombre oficial: Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996. El texto completo de la ley, así como numerosos documentos oficiales y declaraciones del gobierno estadounidense sobre el tema Helms-Burton, se encuentran en internet: www.usia.gov/topical/econ/libertad/libertad.htm.

⁶ Whitefield, Mimi “Despite New Cuba Relationship, U.S. Fines Persist against Firms Accused of Violating Embargo.” Miami Herald, February 24, 2016.

⁷ https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/DeclarationRightDevelopment_sp.pdf

negociación o instrumento coercitivo para hacer avanzar sus intereses.

Más allá del retroceso que promovió el gobierno de Trump en los avances limitados que se produjeron a partir de Diciembre de 2014 y de otras consideraciones desde la ética en las relaciones internacionales sobre el sistema de sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba, la amenaza de reforzar las medidas coercitivas unilaterales de carácter extraterritorial por parte del gobierno de Estados Unidos constituye una violación del derecho al desarrollo de Cuba⁷.

A partir de junio del 2017 la administración de Donald Trump anunció el cambio de política cuyo objetivo declarado fue "entorpecer la actividad económica a cargo del ejército cubano para instar al gobierno de Cuba a proporcionar una mayor libertad económica y política al pueblo de Cuba".

A pesar de que en repetidas ocasiones funcionarios del gobierno de Estados Unidos argumentan que el objetivo del recrudescimiento de las medidas económicas coercitivas unilaterales contra Cuba solamente tratan de penalizar al Gobierno y a las Fuerzas Armadas de Cuba y no al pueblo, lo que según la teoría haría que las sanciones fueran inteligentes o dirigidas, los resultados son diferentes. En Noviembre de 2018 el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de entidades cubanas afectadas, partiendo del supuesto que sancionando a estas solo afectaba al ejército Cubano.⁸ Sin embargo, este es un caso claro que no se puede calificar como sanciones

inteligentes porque en realidad busca afectar las fortalezas de Cuba, en este caso su sector turístico y explotar sus vulnerabilidades, las necesidad de atraer inversión extranjera directa que transfiera tecnología y potencie las exportaciones.

El objetivo que persigue el incremento de la política de sanciones es llevar al estado cubano a la bancarrota.⁹ Siendo Cuba un país socialista en el que la participación del Estado en los procesos económicos es fundamental para garantizar aspectos de justicia social, como el acceso universal a la salud la educación, esto tiene consecuencias que afectan a la población en general.

Los actos más recientes, como en el caso de la amenaza de aplicación del capítulo III de la ley Helms Burton y la amenaza de la re-inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo por parte del Departamento de Estado, busca inicialmente, de acuerdo con el espíritu de la ley de 1996, entorpecer los esfuerzos de Cuba para atraer y promover la inversión extranjera directa, re-crear la imagen de Cuba como un amenaza a Estados Unidos y sobre esa base reforzar el abarcador sistema de sanciones económicas como un instrumento lograr el cambio de régimen en Cuba, un objetivo largamente acariciado por la clase corporativa dominante de Estados Unidos.

⁸ <https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/cuba/cubarestrictedlist/287349.htm>

⁹ Gordon, Joy, The Hidden Power of the New Economic Sanctions, Current History, January, 2019.